



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado n.º: 05001-31-05-022-2018-00549-01 (O2-22-289)
Demandantes: JOSÉ MANUEL BARROS SUÁREZ
Demandados: AFP PROTECCIÓN S.A. Y COLPENSIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No.228 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2022
Asunto: INEFICIACIA DEL TRASLADO RPMPD-RAIS

En Medellín, a los treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 de la Ley 2213 de 2022 en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, quien actúa como magistrado sustanciador, procede a decidir los recursos de apelación impetrados por las accionadas, así como el grado jurisdiccional de consulta a favor de la administradora de pensiones pública demandada, dentro del proceso ordinario instaurado por **JOSÉ MANUEL BARROS SUÁREZ** en contra de **COLPENSIONES y PROTECCIÓN S.A.**, con radicado n.º. 05001-31-05-022-2018-00549-01 (O2-22-289).

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala, y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda.

1. ANTECEDENTES

Mediante vocero judicial el litigioso por activa, **JOSÉ MANUEL BARROS SUÁREZ** pretende que se declare la nulidad y/o ineficacia del traslado de régimen pensional, la reactivación de la afiliación a COLPENSIONES sin solución de continuidad, con el traslado de los aportes que reposan en la cuenta de ahorro individual, junto con sus rendimientos financieros y el reconocimiento y pago de las costas del proceso, con sustento fáctico en que nació el 29 de julio de 1965, estuvo afiliado al ISS por los riesgos IVM hasta cuando se trasladó al RAIS, a través de la AFP COLMENA, hoy PROTECCIÓN S.A.; que al momento del traslado le brindaron una asesoría indebida, y que al final, reclamó a COLPENSIONES la posibilidad de retornar al RPMPD,

pedimento que le fue denegado por faltarle menos de 10 años para arribar a la edad mínima legalmente requerida para pensionarse.

1.1 TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La demanda fue admitida por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 19 de noviembre de 2018 (doc. 04), con el cual ordenó su notificación y traslado a la parte accionada.

El extremo pasivo de la relación procesal PROTECCIÓN S.A., luego de notificada (doc. 17), contestó la demanda el 24 de abril de 2019 por intermedio de poderhabiente judicial (doc. 19), oponiéndose a las pretensiones de la demanda, con fundamento en que no existe vicio en el consentimiento de la afiliación. Seguidamente, propuso las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos del sistema general de pensiones, e inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración por falta de causa.

Por su parte, estando notificada (doc. 05), COLPENSIONES contestó la demanda el 28 de enero de 2019 a través de apoderada judicial (doc. 11), oponiéndose a la prosperidad de la demanda por carecer de sustento fáctico y jurídico, a la vez de proponer las excepciones de mérito que denominó: inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir, imposibilidad jurídica para cumplir con las obligaciones pretendidas, y prescripción.

1.2.- DECISIÓN DE PRIMER GRADO

El proceso se dirimió en primera instancia mediante sentencia proferida 4 de noviembre de 2021 (docs. 31 y 32), con la que el cognoscente de instancia declaró la ineficacia de la afiliación efectuada por el demandante al RAIS, condenando a la AFP PROTECCIÓN S.A. a trasladar todos los valores obrantes en la cuenta de ahorro individual del demandante, incluyendo todo lo aportado a la cuenta de ahorro individual, los rendimientos financieros, y las cuotas de administración; al paso de gravar en costas procesales a PROTECCIÓN S.A. a favor de la parte actora.

1.3. APELACIÓN

Inconforme con la decisión, la apoderada judicial de PROTECCIÓN S.A. apeló la decisión de primera instancia, en cuyo sustento adujo que las deducciones efectuadas sobre las cotizaciones tuvieron un origen legal, y se causaron por la gestión de administración

desarrollada por la AFP, misma que generó rendimientos financieros a favor del demandante, los que deben ser devueltos a su representada en caso de confirmarse la devolución de los descuentos, como restitución mutua. Frente a la prima previsional indicó que la misma cubrió los riesgos de invalidez y muerte, estando imposibilitada su representada para reclamar la devolución de los mismos.

De igual modo, la gestora judicial de COLPENSIONES, interpuso el recurso de apelación, sustentándolo en el hecho de que su representada no tiene por qué asumir ninguna condena derivada de un acto jurídico ajeno en el que no intervino y no debía intervenir, máxime si tal consecuencia afecta la sostenibilidad financiera del sistema pensional, por la pensión que a futuro deberá reconocer, afectación que se aumenta cada vez más, en la medida en que la inversión de la carga de la prueba y la imposibilidad física de las AFP en probar la asesoría debida, hacen que cada vez sean más los afiliados que retornan al RPMPD.

1.4. CONSULTA

Toda vez que la decisión de primera instancia fue desfavorable a los intereses de COLPENSIONES, se analizará igualmente en el grado jurisdiccional de consulta a su favor, en lo que no sea materia de la alzada.

1.5. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En el trámite de segunda instancia, la apoderada judicial de COLPENSIONES, allegó alegatos de conclusión en los que solicita se revoque la sentencia de primera instancia, y que no se condene en costas a su representada.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por el extremo litigioso pasivo, advirtiéndose que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., el estudio del fallo impugnado se limitará a los puntos de inconformidad materia de la alzada, al igual que se estudiará la providencia de instancia en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES en lo que no sea materia de los recursos de apelación interpuestos, para lo cual se plantea el estudio del siguiente:

2.1 PROBLEMA JURÍDICO:

El *thema decidendi* en la presente Litis se centra en definir: ¿Si operó la ineficacia de la afiliación y traslado de régimen pensional efectuado por el extremo litigioso por activa a la AFP del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad convidada a juicio?, y de ser así, ¿Cuáles son los efectos jurídicos que devienen de la ineficacia del acto jurídico de traslado de régimen?

2.2 TESIS DE LA SALA Y SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS JURÍDICOS PLANTEADOS

El sentido del fallo de esta Corporación será **confirmatorio**, siguiendo la tesis de que no se brindó la asesoría cualificada, clara y completa que pregona el precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y **modificadorio** en cuanto a las consecuencias jurídicas que conlleva la devolución de las cotizaciones, esto es, que se debe incluir además de los descuentos por gastos o comisión de administración, el traslado de las sumas descontadas para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima y para cubrir las primas de seguros previsionales, descuentos que la AFP encausada debe devolver con sus propios recursos y de manera indexada, de conformidad con los planteamientos que pasan a exponerse:

2.2.1 Ineficacia del traslado del RPMPD al RAIS

En lo que interesa a la Litis, no es objeto de discusión los siguientes hechos: que el accionante venía afiliado al régimen de prima media con prestación definida administrado por el otrora ISS, hoy COLPENSIONES, desde el 1º de abril de 1995 (doc. 03 pág. 71); que no es beneficiario del régimen de transición ni por edad (ibíd. pág. 32), ni por tiempo de servicios cotizados (ibíd. pág. 71); que JOSÉ MANUEL BARROS SUÁREZ se trasladó el **25 de octubre de 1999** a la AFP COLMENA, hoy PROTECCIÓN S.A. (ibíd. pág. 67 y doc. 20 pág. 12); además de solicitar a COLPENSIONES el traslado de régimen pensional el 29 de junio de 2019 (doc. 03 pág. 40), el que le fue denegado por la entidad mediante comunicado del mismo día (ibíd. pág. 35).

Para resolver de fondo la Litis, sea lo primero señalar que este juzgador plural viene acogiendo el criterio jurisprudencial sostenido antaño por la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia y desarrollado desde el año 2008 con la sentencia de radicación n.º 31989 del 9 de septiembre de 2008 hasta la más reciente sentencia SL2229-2022, línea jurisprudencial en la que se haya el precedente judicial por seguir, de donde se desprende que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones es un deber ineludible desde su creación; que la suscripción del formulario de afiliación es insuficiente para probar

el cumplimiento de tal deber, requiriéndose la prueba del consentimiento informado; que la carga de la prueba le corresponde a las AFP, por virtud de su inversión a favor del afiliado como parte débil de la relación jurídica contractual, y que el alcance de la jurisprudencia laboral citada, permite aplicarla a todos los eventos de traslado de régimen pensional, sin importar que el derecho esté consolidado, sea beneficiario del régimen de transición, o esté próximo o no a pensionarse.

En esa misma dirección, preciso es relieves por la Sala que para la fecha del traslado de régimen pensional el 25 de octubre de 1999, la AFP accionada tenía la obligación de brindar información detallada en cumplimiento de lo normado en los artículos 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993, y 97 numeral 1º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003, lo que en palabras de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1217-2021, consiste en: *"ilustrar a sus potenciales afiliados, en forma clara, precisa y oportuna, de las características de cada uno de los dos regímenes pensionales, con el fin de que pudieran tomar decisiones informadas. (...) suministrar (...) una ilustración suficiente, completa, clara, comprensible y oportuna sobre las implicaciones de abandonar el esquema de prima media con prestación definida y sus posibles consecuencias futuras. (...) proporcionar (...) una ilustración acerca de las condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes, lo que incluye la existencia de una transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales."*

Conforme los anteriores basamentos legales y jurisprudenciales, tenemos que, en lo concerniente a la afiliación inicial, se allegó el correspondiente formulario de afiliación (doc. 03 pág. 67 y doc. 20 pág. 12), el cual no fue desconocido ni tachado por la parte actora; empero, tal probanza no refleja que se haya presentado la asesoría cualificada exigida, y por contera, no es posible concluir que la AFP cumpliera con los mínimos de transparencia, claridad y completitud en la información que debía ser suministrada, en tanto no basta explicar los beneficios y características de cada uno de los regímenes, sino también las consecuencias adversas del traslado de régimen, de cuya explicitud no hay prueba alguna, previo al momento de efectuarse el traslado o a la sazón de este.

En este punto, estima pertinente la Sala acotar que si la AFP demandada no cuenta con ningún soporte documental para la fecha del traslado de régimen, al brindarle al actor información únicamente de manera verbal, tal circunstancia deja entrever una clara contravención de lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto 692 de 1994, pues no basta con allegarse un formato pre-impreso de vinculación cumpliendo con los requisitos formales que indica la Superintendencia Financiera de Colombia, sino que se requiere acreditar la efectiva asesoría integral brindada en la antesala del traslado de régimen, ilustrando al interesado

sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, apercibiendo a el promotor del juicio de que para optar por la pensión anticipada antes de la edad mínima debía efectuar aportes voluntarios adicionales o extraordinarios a las deducciones de ley por cotizaciones; que para causar la pensión de vejez se debe contar con una suma dineraria mínima en la cuenta de ahorro individual; que la existencia de eventuales beneficiarios por sobrevivencia incrementan dicha suma mínima requerida, entre otras particularidades, puesto que *in fine* la asesoría no debe estar encaminada a persuadir al afiliado con llamativos rendimientos financieros o la posibilidad de acceder a la pensión sin importar la edad, sino que debe orientarse también a que el afiliado pueda lograr la prestación económica que mejor se acompase con sus expectativas pensionales y densidad cotizacional.

Ahora, si bien la litigiosa por activa de la relación procesal acepta en el interrogatorio que antes de suscribir el formulario de afiliación le brindaron una asesoría grupal (min. 28:00), no puede pasar de soslayo la Sala que el deber de información únicamente se satisface con la evidencia de que la decisión del afiliado haya sido libre e informada, lo que no se logra acreditar por la AFP accionada, puesto que por el contrario, el accionante enfatizó que la asesoría brindada previamente a la afiliación fue superficial, fragmentaria y de corta duración (min. 28:15), y que lo único que le indicaron es que el ISS se iba a acabar (min. 29:00), pero sin expresarle cuáles eran las características puntuales y comparativas del RAIS y del RPMPD, ni las posibles desventajas de su traslado de régimen pensional.

En lo concerniente a las re-asesorías para el traslado entre AFP del mismo régimen, esta Sala ha sido del criterio de que las mismas no convalidan el acto jurídico írrito del traslado, por manera que aún bajo el supuesto de que el 6 de julio de 2018 hubiere sido informado sobre el posible monto de sus mesadas pensionales por vejez en el RAIS (doc. 03 pág. 41), ello no podría, *per se*, tener la virtualidad de subsanar o convalidar las falencias de información al momento del traslado de régimen pensional. A este respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, tuvo la oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: *"la Sala considera que este servicio no tiene la aptitud de subsanar el incumplimiento de la obligación de información en que incurrió la AFP al momento del traslado, por dos razones: (...) porque la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad. Como se dijo, el afiliado requiere para tomar decisiones de la entrega de datos bajo las variables de tiempo e información, que le permitan ponderar costos, desventajas y beneficios hacia el futuro. Desde este punto de vista, un dato solo será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad. Por el contrario, si la asesoría no se otorga oportunamente y, por tanto, pierde su utilidad, ello equivale a la ausencia de información"* (SL1688 de 2019).

Es de resaltar que la AFP del régimen de ahorro individual con solidaridad a la que se afilió y trasladó la pretensora, no desplegó actividad probatoria alguna enderezada a demostrar que el ejecutivo de servicios que atendió a la litigiosa por activa cumpliera con su deber legal de suministrar información clara, completa y comprensible al potencial afiliado, quebrantándose así lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 720 de 1994, pues por el contrario, la falta de soporte documental o archivo de la historia laboral de que trata el artículo 38 del Decreto 692 de 1994 permite inferir que, el traslado de régimen pensional no se ciñó a los parámetros legales y jurisprudenciales, sin que resulten suficientes las manifestaciones ambiguas y generalizadas hechas por el extremo litigioso activo en desarrollo del interrogatorio de parte, y menos aún, las referidas a la condición académica o nivel de instrucción del demandante (min. 26:15) frente a un tema de alta complejidad como lo es la liquidación y cálculo de una mesada pensional, como también las referidas a que el afiliado no haya realizado indagaciones por su cuenta de su situación pensional, en tanto el deber de brindar tal información privilegiada corresponde *ope legis* a la AFP.

De igual forma, en el mismo precedente judicial en cita, la Corte Suprema de Justicia estudia la excepción de saneamiento de la nulidad relativa, precisando que el cambio de régimen pensional debe abordarse desde la institución de la ineficacia en sentido estricto y no desde el régimen de las nulidades sustanciales, salvo en lo relativo a las consecuencias prácticas, esto es, el restablecimiento del status quo, indicando que: *"a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos"*.

Así las cosas, habrá de confirmarse la decisión de instancia en este tópico, en cuanto con acierto declaró la ineficacia de la afiliación efectuada por el demandante al RAIS.

2.2.2 Traslado de las cotizaciones

A este respecto, cumple precisar que tal devolución debe ceñirse a los términos del artículo 1746 del Código Civil, en consonancia a lo pregonado por la jurisprudencia del máximo tribunal de esta jurisdicción, en sentencias con radicado n.º 31898 de 2008, SL4989-2018 y SL1429-2019, al tiempo que COLPENSIONES tiene el deber de recibir las cotizaciones, sin que el hecho de que dicha entidad pueda tratarse de un tercero la imposibilite para recibir los aportes realizados, por la simple y llana razón de que esta entidad administra el régimen de prima media con prestación definida, a donde se encontraba afiliado el demandante antes del traslado de régimen pensional.

En el anterior contexto, la Sala estima pertinente resaltar las prédicas de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia SL2877-2020, en la que se recapitulan las implicaciones y consecuencias de la declaratoria de ineficacia de la afiliación al RAIS, de la cual se trasuntan los apartes pertinentes:

"i) que ésta involucra la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual, en el sentido que debe ser plena y con efectos retroactivos, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida;

ii) que ello incluye el reintegro a Colpensiones, además de lo consignado en la cuenta de ahorro individual, los rendimientos y los bonos pensionales, lo recaudado por gastos de administración y comisiones debidamente indexados durante todo el tiempo que el demandante permaneció en el RAIS, así como los valores utilizados en seguros previsionales y los emolumentos destinados a constituir el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima.

iii) que los efectos de la declaratoria de ineficacia de traslado de régimen pensional, conlleva que todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones."

Así pues, la ineficacia del traslado conlleva precisamente a que el fondo privado de pensiones devuelva todas las cotizaciones que hubiere recibido, incluyendo lo correspondiente al porcentaje que por gastos o comisión de administración haya descontado de las cotizaciones, así como también lo descontado para el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima (Decreto 3995 de 2008 artículo 7, Sentencia SU-062 de 2010) y las sumas de la aseguradora (primas previsionales), pues carecería de sentido y objeto la declaratoria de ineficacia por la falta de la información exigida, de no trasladarse de manera íntegra las cotizaciones efectuadas, viéndose favorecida la AFP sin razón financiera atendible, pues a pesar de que tales descuentos tuvieron un origen legal y sirvieron en su momento a un propósito jurídicamente preestablecido como el aseguramiento de los riesgos de invalidez y muerte, la administración financiera de las cotizaciones o el fortalecimiento de un fondo de garantía, aquellos nunca hubieran sido realizados por la AFP de no haberse verificado la afiliación y traslado de régimen pensional.

En esa misma dirección, esta Sala considera que hay lugar al traslado de todas las cotizaciones y sus rendimientos a COLPENSIONES, a propósito de que engrosen el fondo común de naturaleza pública, según las previsiones contenidas en el artículo 32 de la Ley 100 de 1993, de modo que, se garantice no solo la sostenibilidad financiera del sistema sino también la efectividad del principio de solidaridad de que trata el artículo 2 *ibídem*. Por demás, no hay lugar a reconocer restituciones mutuas, pues como se predica en la sentencia

de la Corte Suprema de Justicia atrás referenciada, se deben devolver todos los rubros descontados de las cotizaciones, y si bien no soslaya esta Sala que existe un pronunciamiento de la Superintendencia Financiera en torno del tema, es preciso indicar que tal acto aborda es el traslado de régimen pensional por voluntad propia y no en virtud de la declaratoria de su ineficacia, además de no ser de obligatorio acatamiento para los operadores judiciales; de ahí que, la Sala se aviene es al precedente jurisprudencial que en derredor del tema ha establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como ampliamente quedó expuesto en líneas anteriores.

Así mismo, debe ordenarse que la devolución de los descuentos de manera indexada, atendiendo a que si bien aquella no fue impetrada con la demanda, esto es, no fue materia de debate en el presente proceso, debe procederse a su reconocimiento oficioso, en tanto que ello no se traduce en una condena sino que solo entraña el reconocimiento del efecto de la pérdida del valor adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo de las sumas descontadas de las cotizaciones por los rubros atrás descritos, prohibiéndose el criterio jurisprudencial expuesto en la reciente sentencia SL950-2022 emitida por la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral.

Ello así, habrá de modificarse la sentencia de primera instancia, en el sentido de que la AFP debe trasladar además de los descuentos por gastos o comisiones de administración, las sumas descontadas de la aseguradora (primas previsionales) y por aportes al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, en forma indexada.

2.2.3 Excepción de prescripción

En cuanto a la excepción de prescripción propuesta, se memora que *"a diferencia de los derechos de crédito y obligaciones, los hechos o estados jurídicos no están sujetos a prescripción. Por ello, puede solicitarse en cualquier tiempo la declaratoria"* (SL1465-2021), a más de que esta Sala ha sido del iterativo criterio que en esta clase de procesos, la declaratoria de la ineficacia impone como consecuencia axial el traslado de las aportaciones de manera integral, y al tratarse de un asunto íntimamente ligado con la materialización del derecho a la pensión de vejez, de naturaleza imprescriptible, unívoco tratamiento ha de reconocérsele, como así lo decantó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia SL361, radicación 63615 del 13 de febrero de 2019.

Como corolario de lo expuesto, se impone para la Sala confirmar la sentencia de primer grado estimatoria de la ineficacia del traslado de régimen pensional, con las modificaciones ya reseñadas atinentes a las consecuencias directas de la declaratoria de ineficacia.

3. COSTAS

Sin costas de segunda instancia en contra de COLPENSIONES, en tanto la sentencia de instancia se analizó integralmente en su favor en virtud al grado jurisdiccional de consulta.

Costas en segunda instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A., por resolverse el recurso de alzada que interpuso en disfavor a sus intereses, en términos del numeral 4 del artículo 365 del CGP, aplicable al proceso laboral por remisión analógica del artículo 145 del estatuto instrumental laboral, fijándose como agencias en derecho la suma de \$1.000.000, equivalente a un (1) SMMLV, y a favor de la demandante.

Frente a las costas de primera instancia, habrán de confirmarse, en razón a que no fueron materia de apelación.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN**, Sala Quinta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral **SEGUNDO** de la sentencia venida en consulta y apelación proferida el 4 de noviembre de 2021 por el Juzgado Veintidós Laboral del Circuito de Medellín, el cual quedará en los siguientes términos:

*"**SEGUNDO: CONDENAR** a PROTECCIÓN S.A., a devolver o trasladar a COLPENSIONES todos los valores, recursos o sumas que hubiere recibido con motivo de afiliación y traslado del actor JOSÉ MANUEL BARROS SUÁREZ y que obren en su cuenta de ahorro individual, como cotizaciones realizadas, con todos sus frutos e intereses como lo dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con todos los rendimientos que se hubieren causado, y a trasladar lo descontado por gastos o comisiones de administración, por primas del seguro previsional y por aportes al Fondo de Garantía de la Pensión Mínima, descuentos que deberá devolver o trasladar de manera indexada, de conformidad con la parte motiva de este fallo, y a la vez, se CONDENA a COLPENSIONES a recibir y/o cobrar esos dineros."*

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia venida en apelación y en consulta.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo a cargo de PROTECCIÓN S.A., fijándose como agencias en derecho la suma de \$1.000.000 a favor de JOSÉ MANUEL BARROS SUÁREZ. Las de primera instancia se confirman.

Lo resuelto se notifica mediante **EDICTO**, acogiéndose el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORIUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA
Magistrada


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario